En Logroño, a 2 de febrero de 2018, el Consejo Consultivo de La Rioja, reunido en su sede, con asistencia de su Presidente, D. Joaquín Espert y Pérez-Caballero y de los Consejeros, D. Enrique de la Iglesia Palacios, D. José Luis Jiménez Losantos y D. Pedro Prusén de Blas, así como del Letrado-Secretario General, D. Ignacio Granado Hijelmo, habiendo excusado su asistencia el Consejero D. José M^a Cid Monreal y siendo ponente D. José Luis Jiménez Losantos, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

2/18

Correspondiente a la consulta formulada por el Excmo. Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, sobre el *Anteproyecto de Decreto por el que se regula la Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Discapacidad*.

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Único

La Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia ha tramitado el procedimiento para la elaboración del referido Anteproyecto de Decreto, que consta de la siguiente documentación:

- Resolución, de la Directora General de Servicios Sociales, de inicio del procedimiento, de 30 de octubre de 2015. Va acompañada de una memoria justificativa, firmada electrónicamente por la expresada Directora General, y de un texto de la norma proyectada, denominado "*Borrador 1; 14/06/2016*". Interesa destacar que la memoria recoge la consulta efectuada, en fase de elaboración, al Consejo Sectorial para Personas con Discapacidad, en fecha 2 de noviembre de 2015, así como las propuestas de tal órgano consultivo, que menciona.
- Diligencia de formación de expediente, de la Secretaria General Técnica de la Consejería, de 17 de junio de 2016, acordando la continuación de la tramitación, y estableciendo los trámites a seguir.
- Oficio, de la Secretaría General Técnica, de 16 de junio de 2016, dirigido al Consejo Riojano de Servicios Sociales, remitiéndole el texto proyectado, y requiriéndole su preceptivo informe.
- Certificación de la Secretaría del Consejo Riojano de Servicios Sociales, de 1 de julio de 2016, expresando haber sido examinado el Anteproyecto en la sesión de 21 de junio de 2016; y, recogiendo las sugerencias que este efectúa, las mismas, aceptadas por el órgano tramitador, dan lugar al denominado "*Borrador n° 2; 02/12/2016*", que las incorpora.

-Observaciones al “*Borrador 2*”, a petición de la Secretaría General, remitidas por: i) la Federación Riojana de Municipios, de fecha 16 de diciembre de 2016; ii) la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja (remitido por la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en La Rioja), de 26 de diciembre de 2016; iii) el Ayuntamiento de Logroño, de 23 de diciembre de 2016, y remitida a través de la Federación Riojana de Municipios; y iv) la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, de 28 de diciembre de 2016. También se trasladó el expediente a la Consejería de Fomento y Política Territorial, la cual declinó manifestarse. Con las sugerencias efectuadas por las Entidades citadas, se elaboró el denominado “*Borrador n° 3; 06/04/2017*”, que consta en el expediente.

-Solicitud, de fecha 6 de abril de 2017, de la Secretaria Técnica de la Consejería, dirigida al Servicio de Ordenación, Normativa, y Asistencia Técnica (en adelante SOCE), para que emita el preceptivo informe. Va acompañada de todas las actuaciones e informes efectuados, hasta ese momento, en el expediente.

-Informe, de la Jefa del SOCE, efectuando observaciones al “*Borrador 3*” remitido, referidas fundamentalmente a la aplicación de los preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC’15) que regulan la utilización de medios informáticos y telemáticos en las comunicaciones entre los administrados y las administraciones. Al acogerse las sugerencias efectuadas en este informe, se elabora, y consta en el expediente, un denominado “*Borrador n°4; 01/08/2017*”.

-Solicitud, de fecha 7 de septiembre de 2017, de la Secretaría Técnica de la Consejería, dirigida a la Dirección General de los Servicios Jurídicos, para que emita el preceptivo informe. Va acompañada de todas las actuaciones e informes efectuados, hasta ese momento, en el expediente, incluido el “*Borrador 4*”, sobre el que ha de efectuarse.

-Informe, de los Servicios Jurídicos, de 29 de septiembre de 2017, considerando que el Anteproyecto normativo tiene cobertura legal, y se ajusta a Derecho. Añade una serie de precisiones referidas a mejora del estilo y claridad del texto. En su acogimiento, se elabora el “*Borrador n°5; 19/12/2017*”, que consta en el expediente tras el informe referido.

-Informe, de la Secretaría General Técnica de la Consejería tramitadora, de 19 de diciembre de 2017, referente a las actuaciones seguidas por el Anteproyecto.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito firmado electrónicamente el 22 de diciembre de 2017 y registrado de entrada en este Consejo en el siguiente día 26, el Excmo. Sr. Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja, remite al Consejo Consultivo de La Rioja, a través de su Presidente y para dictamen, el expediente tramitado sobre el asunto referido.

Segundo

Mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2017, registrado de salida el 28 de diciembre de 2017, el Sr. Presidente del Consejo Consultivo procedió, en nombre del mismo, a acusar recibo de la consulta, a declarar, provisionalmente, la misma bien efectuada, así como la competencia del Consejo para evacuarla en forma de dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero señalado en el encabezamiento, la correspondiente ponencia quedó incluida, para debate y votación, en el orden del día de la sesión del Consejo Consultivo convocada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Necesidad del dictamen del Consejo Consultivo y su ámbito.

El artículo 11.c) de la Ley autonómica 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja, determina el carácter preceptivo del dictamen de este Consejo, que ha de ser consultado en relación con “*los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en desarrollo o ejecución de leyes estatales o autonómicas*”, precepto cuyo contenido reitera el artículo 12.2.C) del Reglamento Orgánico y Funcional del Consejo Consultivo, aprobado por Decreto autonómico 8/2002, de 24 de enero.

El Anteproyecto normativo sometido a la consideración de este Consejo, tiene como finalidad adaptar la normativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR) a las modificaciones producidas en el ámbito de la materia que pretende regular, cuales son las condiciones de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, introducidas en la legislación estatal básica por el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo (RD Leg.) 1/2013, de 29 de noviembre (LPD'13), así como, y en su desarrollo sobre esta concreta materia, por el Real Decreto (RD) 1056/2014, de 12 de diciembre, el cual, sin perjuicio de las competencias exclusivas reconocidas a las Comunidades Autónomas en materia de asistencia social (Disposición Adicional 3ª), y con carácter regulador de las condiciones básicas al amparo de lo dispuesto en la regla 1ª del art. 149.1 de la Constitución (Disposición Final 1ª), establece las que deben garantizar la igualdad, en todo

el territorio nacional, en cuanto a la emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

La normativa autonómica sobre la misma materia está constituida actualmente por la Orden 17/2001, de 11 de diciembre, que la proyectada viene a sustituir.

En definitiva, siendo el objeto del Anteproyecto el desarrollo de normas estatales que hacen referencia a lo regulado por el Anteproyecto dictaminado, es claro el carácter preceptivo de nuestro dictamen.

En cuanto al ámbito del mismo, teniendo en cuenta lo dispuesto en nuestra Ley reguladora, procede *un juicio de estatutoriedad*, examinando la adecuación del texto al Estatuto de Autonomía y, por extensión, al *bloque de constitucionalidad* definido en el art. 28.1º de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en el que aquél se inserta, así como *un juicio de legalidad*, esto es, sobre la adecuación de la norma reglamentaria proyectada a la Ley que le sirve de cobertura y del consiguiente respeto del *principio de jerarquía normativa*, para, de este modo, evitar que la norma proyectada pueda quedar incurso en alguno de los vicios de nulidad de pleno Derecho recogidos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC'15).

Segundo

Cumplimiento de los trámites del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

Este Consejo Consultivo, en los dictámenes referentes a la elaboración de normas reglamentarias, estima trascendente el adecuado cumplimiento del procedimiento administrativo especial de elaboración de disposiciones generales que, cual la que es objeto de este dictamen, tras su aprobación y publicación, pasan a integrarse en el ordenamiento jurídico, por cuanto que el mismo tiene por finalidad encauzar adecuadamente el ejercicio de una de las potestades de efectos más intensos y permanentes de la Administración, la reglamentaria. De ahí que se considere relevante la necesidad del desarrollo ajustado de este trámite, no sólo en sus aspectos formales sino también sustantivos, para que pueda desplegar adecuadamente su eficacia jurídica.

Es, por ello, necesario examinar si se han cumplido los trámites establecidos en los artículos 33 a 41 de la Ley autonómica 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen jurídico de la Administración de la CAR, que son los siguientes:

1. Resolución de inicio del expediente.

Según el artículo 33. 1 de la Ley 4/2005, *“el procedimiento para la elaboración de los reglamentos se iniciará mediante resolución del órgano administrativo competente por razón de la materia”*.

En el presente caso, la Resolución de inicio, de 30 de octubre de 2015, fue dictada por la Directora General de Servicios Sociales de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1.4.i), del Decreto 25/2015, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de esa Consejería, el cual dispone que, con carácter general, corresponde a las Direcciones Generales la función de dictar *“la Resolución de inicio de la tramitación de las disposiciones de carácter general referidas a materias propias de la Dirección General”*; cuál es el caso, ya que el art. 7.2.4, a) de esa misma disposición atribuye a la citada Dirección General la competencia para la elaboración y gestión de programas especiales en materia de personas con discapacidad.

Desde el punto de vista del contenido, el artículo 33.2 de la Ley 4/2005 dispone que *“la Resolución de inicio expresará sucintamente el objeto y finalidad de la norma, las normas legales que en su caso deba desarrollar, así como el fundamento jurídico relativo a la competencia ejercida”*.

La indicada Resolución de inicio, aunque de manera adecuada sucinta, cumple lo preceptuado en el artículo: menciona la competencia de la CAR para normar la materia objeto del Anteproyecto; indica las normas que la disposición proyectada tiende a desarrollar; concreta la norma que viene a sustituir, especificando la necesidad de desarrollar, a través de normativa a ellos adaptada, la legislación estatal precitada (LDP'13 y RD 1056/2014); y, por último, funda jurídicamente la competencia que ejerce.

En definitiva, la Resolución de inicio cumple adecuadamente con las prescripciones establecidas en el artículo.

2. Elaboración del borrador inicial.

A tenor de lo establecido en el artículo 34 de la Ley 4/2005:

“1. El órgano del que emane la resolución de inicio elaborará un borrador inicial integrado por un preámbulo y por el texto articulado del reglamento que incluirá, en su caso, una disposición derogatoria de las normas anteriores que resulten afectadas.

2. El borrador inicial irá acompañado de una memoria justificativa acerca de la necesidad de la aprobación de la nueva norma, de su adecuación al objeto y finalidad fijados en la resolución de inicio, la incidencia que habrá de tener en el marco normativo en que se inserte, una relación de las

disposiciones afectadas y la tabla de vigencias de las disposiciones anteriores sobre la misma materia, así como una valoración de los efectos previsibles que puedan seguirse de su aplicación. Finalmente, incluirá, en su caso, también los estudios e informes previos que le sirvan de fundamento, así como una relación de aquellos informes o trámites que se consideren necesarios en la tramitación del expediente.

3. En los casos de creación de nuevos servicios o de modificación de los existentes, o aquellos en los que de la aplicación del reglamento se prevea que van a derivar derechos y obligaciones de carácter económico, deberá adjuntarse al expediente un estudio del coste y financiación”.

En el expediente, consta la Memoria justificativa, de 14 de junio de 2016, firmada electrónicamente por la Directora General de Servicios Sociales, que se ajusta a las exigencias previstas en el precepto examinado, al hacer referencia, en su contenido, a la competencia del órgano proponente; el marco normativo en que se incardina el Anteproyecto; argumentación sobre su necesidad; resumen del contenido de la norma proyectada; impacto presupuestario y de género; las mejoras de la calidad normativa que contiene; la tabla de vigencias , y el procedimiento de elaboración y actuaciones que han de desarrollarse en él, hasta su sometimiento a aprobación.

Va acompañada por un borrador del texto de la norma proyectada, que es formulada como Decreto.

Todo ello permite concluir su acertada adecuación a los requisitos previstos en el precepto examinado.

3. Formación del expediente de Anteproyecto de reglamento.

El artículo 35 de la Ley 4/2005 dispone lo siguiente:

1. Una vez elaborado el borrador inicial, así como la documentación complementaria a que se refiere el artículo anterior, el expediente se remitirá a la Secretaría General Técnica de la Consejería, cuyo titular, a la vista de su contenido declarará, en su caso, formado el expediente de anteproyecto y acordará la continuación del procedimiento por la propia Secretaria General Técnica.

2. Por la Secretaría General Técnica de la Consejería se determinarán los trámites e informes que resulten necesarios para garantizar el acierto y legalidad del reglamento.

3. Cuando se observaran defectos en la formación del expediente por el órgano administrativo que dictó la resolución de inicio el mismo podrá ser devuelto al citado centro a efectos de que se proceda a su subsanación”.

En la documentación del expediente, consta la Diligencia de la Secretaría General Técnica, de 17 de junio de 2016, que declara formado el expediente, acuerda la continuidad de la tramitación del proyecto de Decreto, y concreta como informes preceptivos: i) el del Consejo Riojano de Servicios Sociales, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 51.2.b), de la Ley autonómica 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja; ii) del SOCE, de conformidad con la norma que lo crea; iii) el de la Dirección General de los Servicios Jurídicos; iv) el informe final de la propia Secretaria General Técnica, y, v) el dictamen, con carácter preceptivo, de este Consejo.

Y, como Entidades a las que se considera que se les ha de trasladar el texto proyectado para que, si lo estiman oportuno, puedan manifestarse sobre el mismo, señala a: i) la Federación Riojana de Municipios; ii) la Jefatura Provincial de Tráfico (a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja); y iii) las Consejerías de Salud, y de Fomento y Política Territorial.

En la relación de documentos que obran en el expediente, expuesta en el Antecedente único del asunto, se relatan los informes preceptivos y las observaciones aportadas; y se deduce que, a excepción de la Consejería de Fomento, que ha declinado la facultad concedida, todos los demás órganos y Entidades a quienes les ha sido puesta en conocimiento el Anteproyecto han efectuado sus informes y escritos con observaciones.

Asimismo, consta que ha sido consultado el Consejo Sectorial para Personas con Discapacidad, si bien se efectúa una mención aparte, ya que la consulta se ha realizado en la fase de elaboración, y las sugerencias que efectuó se incorporaron al texto inicial, constando recogidas de manera detallada en la Memoria justificativa inicial de la Secretaria General Técnica de la Consejería.

Se cumplen, pues, debidamente, los requisitos previstos en el artículo regulador de este trámite.

4. Trámite de audiencia.

La Ley 4/2005 regula expresamente este trámite (diferenciándolo del de información pública, del que se ocupa su artículo 37). A este respecto, el artículo 36 de la Ley autonómica vigente dispone lo siguiente:

“1. El anteproyecto deberá someterse a la audiencia de los interesados, directamente o por medio de las entidades reconocidas por la Ley que los agrupen o los representen, en los siguientes casos: a) Cuando lo exija una norma con rango de Ley; b) Cuando la disposición afecte a derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

2. No será exigible el trámite previsto en el punto anterior respecto de las entidades citadas si han sido consultadas en el procedimiento de elaboración o si han intervenido en él mediante la emisión de informes o participación en órganos colegiados.

3. La audiencia no será exigible en relación con los proyectos de disposiciones que regulen la organización del Gobierno, de la Administración General de la Comunidad Autónoma o de los entes integrantes de su Sector Público, salvo que en alguno de estos casos se regule la participación de los

ciudadanos o de sus organizaciones y asociaciones representativas en el ejercicio de sus funciones u órganos. Tampoco será exigible el trámite de audiencia en relación a aquellas disposiciones que tengan por objeto exclusivo la regulación de los tributos o ingresos de derecho público.

4. El plazo de la audiencia debe ser adecuado a la naturaleza de la disposición, y no inferior a quince días. Por razones justificadas, y mediante acuerdo o resolución debidamente motivado, este plazo podrá reducirse a siete días”.

Conforme se recoge en el precedente punto 3, la Secretaría General Técnica de la Consejería, en la Diligencia de formación del expediente, establece los trámites que han de desarrollarse en el expediente, y especifica aquellas entidades que, agrupando a interesados, deben ser oídos conforme a las exigencias del precepto.

A todas las allí relacionadas se les ha remitido el Anteproyecto para su conocimiento, examen y emisión de opiniones respecto a su contenido, así como aportación de sugerencias que, de estimarse oportunas, contribuyan a la finalidad que pretende.

Y asimismo, en la relación de documentos incorporados al expediente, que en este dictamen se efectúa en el Antecedente único del asunto, consta cómo se dio traslado del texto proyectado a la Federación Riojana de Municipios, la Jefatura Provincial de Tráfico, y a las Consejerías de Salud y de Fomento y Política Territorial del Gobierno de La Rioja. Y, como se especifica en el expresado Antecedente único, todas ellas, a excepción de la Consejería de Fomento, aportaron criterios y sugerencias de mejora tanto sobre el texto, como sobre criterios que permitieran a la norma cumplir, con amplitud, la finalidad que con ella se pretende.

Y hemos de reiterar que la práctica totalidad de aportaciones y sugerencias efectuadas por las expresadas Entidades, para su detalle y concreción, han sido incorporadas al texto proyectado, ocasionando el denominado “Borrador 3”.

Con ello se ha dado cumplimiento el trámite exigido en el precepto examinado.

5. Informes y dictámenes preceptivos.

Según el artículo 39 de la Ley 4/2005:

“1. Los informes preceptivos y los dictámenes de los órganos consultivos se solicitarán en el momento y en la forma que determinen sus disposiciones reguladoras. El plazo para su emisión será el previsto en ellas, y a falta de previsión expresa, el de diez días.

2. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la tramitación del reglamento, en cuyo caso podrá interrumpirse la misma en

tanto no se emitan e incorporen al expediente. El plazo de espera no podrá exceder en ningún caso de tres meses, salvo disposición legal que determine un plazo menor o establezca otros efectos ante la falta de emisión.

3. El Anteproyecto de reglamento será informado por la Dirección General de los Servicios Jurídicos una vez cumplimentados todos los trámites y previamente a la emisión de los dictámenes que, en su caso, resulten procedentes”.

Al igual que hemos efectuado en el ordinal anterior, nos remitimos a la relación de documentos que se efectúa en el Antecedente único del asunto, en el que se recoge tanto la relación de informes preceptivos exigibles determinada por la Secretaría General Técnica de la Consejería en la Diligencia de formación del expediente, como la de los emitidos y que en él obran. Son los correspondientes a: Consejo Riojano de Servicios Sociales; Servicio de Ordenación, Normativa y Asistencia Técnica (SOCE); y Dirección General de Servicios Jurídicos, con lo que se ha cumplido adecuadamente con el precepto aquí examinado.

6. Integración del expediente y Memoria final del Anteproyecto.

Finalmente, según el artículo 40 de la Ley 4/2005:

“1. Concluidas las actuaciones de instrucción y con carácter previo a la emisión del dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, que en su caso deba emitirse, la Secretaría General Técnica encargada de la tramitación, elaborará una memoria sucinta de todo el procedimiento, en la que se reseñarán los antecedentes, los trámites practicados y su resultado, las modificaciones introducidas en el texto del anteproyecto como consecuencia del contenido de los documentos e informes resultantes de los trámites de audiencia, información pública e informes preceptivos, así como una exposición motivada de aquellas que hayan sido rechazadas. Le memoria deberá recoger expresamente una declaración motivada de la adecuación al ordenamiento jurídico del texto del Anteproyecto.

2. El expediente de elaboración del reglamento se ordenará a partir de la resolución de inicio seguido del anteproyecto y documentación correspondiente, así como de los estudios y consultas evacuados y demás actuaciones practicadas.

3. En aquellos casos en que proceda la emisión de dictámenes por el Consejo Consultivo, y una vez recibido el mismo, se procederá a introducir las modificaciones que procedan en el texto del anteproyecto formulándose por la Secretaría General Técnica correspondiente la memoria final del anteproyecto, en aquellos casos en que la misma resulte necesaria, que procederá en todo caso a la formalización del proyecto de reglamento”.

En el expediente sometido a nuestra consideración, consta la Memoria de la Secretaría General Técnica de la Consejería, de 19 de diciembre de 2017, que recoge, pormenorizadamente, todas las exigencias que, respecto de su contenido, en el apartado 1 de este artículo, se consignan.

Con base en lo hasta aquí expuesto, hay que concluir que se han seguido adecuadamente los trámites legales del proceso de elaboración de una disposición de carácter general.

Tercero

Competencia de la Comunidad Autónoma para dictar la norma proyectada y cobertura legal y rango normativo de la misma.

1. Como se recoge en la Parte expositiva de la norma examinada, el vigente Estatuto de Autonomía de La Rioja (EAR'99), recoge, en su artículo 8.1.30, como materia sobre las que tiene competencia con carácter exclusivo, la correspondiente a "*asistencia y Servicios sociales*", materia en la que se incardina la regulación que la norma efectúa. Asimismo, en el apartado 31 del mismo precepto se le otorga competencia, con igual carácter de exclusividad, en las materias de "*promoción e integración de... tercera edad y grupos sociales necesitados de especial protección...*". Por tanto, no cabe duda de la competencia de la CAR para dictar la norma proyectada.

2. En cuanto a la cobertura legal, el Anteproyecto la encuentra tanto en la precitada LPD'13 como en el RD 1056/2014, normativa estatal que, con el carácter de legislación básica, habilita a las Comunidades Autónomas para su desarrollo normativo, como lo demuestra la Disposición Transitoria Primera del precitado Real Decreto, al habilitar a las Administraciones públicas competentes para adaptar sus normas a las previsiones en él contenidas.

3. Respecto al rango normativo de la disposición es el de Decreto, como corresponde al tratarse del ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno de La Rioja en desarrollo de la precitada legislación estatal básica y según resulta también del art. 30.2 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la CAR, a cuyo tenor los reglamentos adaptarán la forma de Decreto si son aprobados por el Consejo de Gobierno.

4. En definitiva, la norma proyectada se dicta en el ámbito de las competencias de la CAR, el titular de la potestad reglamentaria tiene para ello una cobertura legal específica y el Anteproyecto presenta el rango normativo adecuado.

Cuarto

Examen del Anteproyecto de Decreto.

1. Contenido general.

El Anteproyecto normativo objeto del presente dictamen, tiene por objeto la regulación de la Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, en el ámbito de la CAR. Precedido una Parte expositiva, contiene 14 artículos, distribuidos en 2 Capítulos, dos Disposiciones Adicionales, una Transitoria, una Derogatoria, y dos Finales.

-En el Capítulo I, se recogen las disposiciones generales relativas al objeto, definición y modelo, ámbito territorial de aplicación de la norma, titulares del derecho y condiciones de utilización.

Recoge una definición de la misma, partiendo de la normativa básica señalada, y contemplándola como un documento público acreditativo del derecho a estacionar los vehículos automóviles en que se desplacen, lo más cerca posible del lugar de acceso o de destino (art. 2).

Además, se fijan las condiciones de su ámbito territorial de validez y se reconocen las mismas condiciones de uso para las emitidas por otras Administraciones públicas (art. 3).

Como novedad frente a la regulación anterior, se hace mención a las plazas de aparcamiento reservadas que, siguiendo la normativa básica, prevé, en los principales centros de actividad de los núcleos urbanos, un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada, y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento, por cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo (art. 4).

Se amplía, con respecto a la regulación anterior, la condición de titular de la tarjeta de estacionamiento, al posibilitar su concesión, no sólo a las personas que presenten movilidad reducida conforme a la normativa vigente en materia de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, sino también a las personas que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento de grado de discapacidad (art. 6).

-En el Capítulo II, se regula el procedimiento de concesión, y los derechos y obligaciones de sus titulares. Se confiere la facultad de concesión a la Dirección General con competencia en materia de servicios sociales. Regula el procedimiento tanto para la

concesión o denegación, como para la renovación de la misma, exigiéndose la previa valoración de las dificultades de movilidad a través del correspondiente dictamen preceptivo y vinculante, de conformidad con los criterios establecidos en el RD 1791/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Se determinan los derechos de la personas titulares de la tarjeta, recogiendo los contemplados en la normativa básica, lo que supone una ampliación con respecto a lo que se señalaba en la Orden 17/2001, que viene a sustituir, así como las obligaciones, en aras a garantizar la correcta utilización de la misma (arts. 10 y 11).

Se mantiene la validez de la tarjeta, en cinco años renovable, si bien se contempla también la posibilidad de periodos inferiores, cuando el dictamen preceptivo del Centro de valoración de la discapacidad y dependencia contemple una movilidad reducida o agudeza visual reducida de carácter transitorio (art. 12).

En su artículo 14, regula el Registro de Tarjetas de estacionamiento dependiente de la Consejería con competencia en materia de servicios sociales, con la finalidad de garantizar la efectividad de los derechos previstos en el Decreto, disponiendo que se anotaran las Resoluciones de concesión, denegación, renovación, caducidad y revocación de las tarjetas.

Como novedad respecto a la normativa básica y recogiendo las recomendaciones del Consejo Sectorial de personas con discapacidad, se amplía el objeto de la norma para tratar de acoger en su ámbito a personas limitadas de movilidad que no puedan desplazarse en condiciones normales, incluyendo a los colectivos afectados de fatiga crónica, referido a aquellas personas que, según informe del Especialista en Neurología, presenten esclerosis múltiple y fatiga crónica severa.

-Siguiendo los criterios marcados por el RD 1056/2014, incluye, a través de la Disposición Adicional Primera, la tarjeta provisional prevista para menores de 18 años con diagnóstico de cáncer, aun cuando no tengan reconocida la discapacidad, y estén en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, debiendo presentar para ello informe del Médico especialista en Oncología infantil, que indique el tiempo estimado de duración de los tratamientos.

-Regula las condiciones aplicables a las tarjetas emitidas con anterioridad a su aplicación (Disposición Transitoria Única); deroga expresamente la Orden 17/2001, de 11 de diciembre, creadora y reguladora del mismo documento (Disposición Derogatoria Única), y habilita a la Consejería competente en materia de servicios sociales para dictar las disposiciones oportunas de desarrollo y ejecución, así como a actualizar los formularios que le acompañan como Anexos.

-Por último, establece su entrada en vigor en el día siguiente a su publicación.

2. Observaciones al texto proyectado.

A lo largo del dictamen se ha venido mencionando la incorporación al expediente de los informes y observaciones de los órganos y entidades que han de emitirlos por exigencia normativa o se les ha concedido audiencia para que las efectuaran, dando lugar a los distintos borradores del Anteproyecto que constan en el expediente.

Dichos borradores son consecuencia de la incorporación, por el órgano tramitador, de la práctica totalidad de sugerencias efectuadas por tales entes, y ello en atención a dos simples razones: i) por un lado, porque, tanto las observaciones de los informes, como las sugerencias efectuadas en los escritos de alegaciones, han sido concretas, razonadas y razonables; y ii) la disponibilidad del órgano tramitador a llevar a cabo los cambios oportunos apuntados en cuanto que contribuían a la mejora del texto, así como a la adecuación de la norma a las exigencias legales, y a un más eficiente adecuación a la finalidad teleológica de la norma proyectada: la atención, lo más concreta y exacta posible del colectivo al que se dirige, en el concreto aspecto que se regula.

Ese actuar ha dado como resultado los cinco borradores que, a lo largo de la tramitación se han elaborado, cada uno de los cuales presenta cambios significativos respecto del anterior a consecuencia, como venimos indicando, de la incorporación de las correcciones y sugerencias efectuadas.

Con lo precedente se quiere significar que el proyecto normativo contenido en el borrador final se adecua correctamente a las exigencias constitucionales y legislativas que le sirven de referencia para llevar a cabo el mandato que el RD 1056/2014, en su Disposición Transitoria Primera, efectúa a las Administraciones públicas para adaptar su normativa a las disposiciones del mismo.

En definitiva, el contenido del Anteproyecto debe ser dictaminado positivamente.

CONCLUSIONES

Primera

La Comunidad Autónoma de La Rioja tiene competencia para dictar la norma proyectada, al amparo del artículo 8.1, apartados 30 y 31, del vigente Estatuto de Autonomía de La Rioja (EAR´99).

Segunda

Se han respetado los trámites procedimentales que, para la elaboración de los reglamentos, exigen los artículos 33 a 42 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Tercero

El Anteproyecto de Decreto por el que se regula la Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad se ajusta al ordenamiento jurídico.

Este es el Dictamen emitido por el Consejo Consultivo de La Rioja que, para su remisión conforme a lo establecido en el artículo 53.1 de su Reglamento, aprobado por Decreto 8/2002, de 24 de enero, expido en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Joaquín Espert y Pérez-Caballero